

EL MODELO NEOCONSERVADOR Y LA CRISIS DE LOS PARTIDOS EN ARGENTINA (*)

MARIA DE LOS ANGELES YANUZZI *

El sistema político argentino atraviesa, en la actualidad, una profunda crisis de representatividad que amenaza su misma legitimidad. Esta crisis, en realidad, no es más que el emergente del desfase producido entre las estructuras políticas tradicionales y las transformaciones sufridas en el mundo de la política, a partir de la quiebra del modelo de Estado social. Se trata de un proceso que se percibe, en una primera aproximación, como una creciente desconfianza por parte de la sociedad tanto en las estructuras partidarias en general, como en la misma dirigencia política en particular. Como sostiene Sartori,

"los regímenes políticos están sostenidos por su "legitimidad", y se ven socavados, si no destruidos, por una crisis de legitimidad. A su vez, la crisis de legitimidad se hace perceptible y suele detectarse como crisis de "autoridad"". (1)

Teniendo en cuenta la forma en que se manifiesta una crisis de legitimidad, vemos que, en la cotidianidad política, este tipo de crisis se traduce en una creciente dificultad por parte de las estructuras partidarias y de sus dirigentes para articular y mantener los consensos. De esta forma, se incentiva una peligrosa escisión entre Estado y sociedad, ya que las políticas concretas que se implementan corren el riesgo de no contar con el consentimiento necesario para su aplicación.

Esta crisis de autoridad a la que hacemos mención significa, además, que las lealtades partidarias, tal como caracterizaron la vida política hasta mediados de los '70, se han quebrado. Los clivajes ideológicos que antes permitieron dar cuenta del mundo circundante, hoy se han convertido en trabas que, más que acercar, distancian al político del hombre común. Y en este distanciamiento que se produce, las profundas transformaciones que hoy enfrenta inexorablemente la sociedad, quedan sin una explicación que permita comprenderlas acabadamente.

Si nos atenemos a un análisis estrictamente político, vemos que la quiebra del Estado social ha llevado, objetivamente, a cuestionar el rol hasta entonces asignado al Estado como articulador entre política y economía y, por consiguiente, como lugar de

* Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales / Consejo de Investigaciones (CIUNR), Universidad Nacional de Rosario.

construcción de un espacio común. Y, consecuentemente, a partir de esto también ha quedado cuestionada la función que, dentro de ese marco, deberían cumplir los partidos políticos.

Este debate es el que, en realidad, está latente en la sociedad argentina desde mediados de 1975. Sin embargo, siempre se lo presentó de manera distorsionada, velado por circunstancias que no permitían -y, en muchos casos, tampoco hoy permiten- ver la profundidad del problema. Incluso, es recién en el último tiempo que se ha incorporado al discurso partidario el diagnóstico de la crisis. En su discurso de actualización doctrinaria, el presidente Menem explicitaba en ese sentido:

“La era continentalista que estamos viviendo cuestiona la cultura, la ideología y la política surgida y desarrollada durante la era nacionalista que ha terminado; y la fuerza inercial electoral del justicialismo heredada de la conducción del general Perón se ha agotado como fuerza homogénea decisiva brindando su último servicio con el triunfo electoral del 8 de julio de 1989. Por ello están en crisis los partidos políticos y a nosotros nos caben las generales de la ley. Por eso se habla del ‘fenómeno Fujimori’ y en cada provincia aparecen líderes locales disputando a los partidos tradicionales el favor de la población”. (2)

Bien sabemos que esta crisis por la que atraviesa la organización partidaria no es un fenómeno acotado a un solo país. Por el contrario, esta situación se reedita en diversas partes del mundo, como consecuencia de las características que va asumiendo la reconversión capitalista. Sin embargo -y por eso nuestro interés en analizar el caso argentino-, creemos que en cada unidad nacional se conjugan diversas singularidades que contribuyen a agravar o a atenuar los efectos de la crisis, singularidades que deben ser analizadas meticulosamente para comprender la magnitud que aquella adquiere en cada caso concreto.

La quiebra de las lealtades partidarias

Son numerosos los factores que han llevado a los partidos políticos argentinos a esta situación de crisis. La implementación, por parte del gobierno peronista, de un proyecto neoconservador, que arrasadoramente incrementa los niveles de marginalidad social, sin duda contribuye a agudizar la quiebra de las lealtades partidarias, denigrando, incluso, la política como instancia de resolución de conflictos. Sin embargo, también existen otros factores que agravan aun más la situación y que, en principio, son secuela de un sistema político pergeñado en los hechos, y que se caracterizó por una alternancia entre gobiernos civiles y militares, con una marcada preponderancia de estos últimos.

Como dato de la realidad que hoy determina nuestro análisis, vemos que gran parte de las figuras políticas de mayor prestigio aparecen en el imaginario social como ‘no

confiables'. Dicho en otros términos, se han socavado las bases mismas de sustentación de la autoridad. Qué significa esto?. Como sostiene Sartori,

"la autoridad es la forma de poder, o la forma de influencia, que surge de una investidura espontánea y cuya eficacia deriva de su capacidad de ser escuchada, de su reconocimiento. Igualmente cabe decir que la autoridad es un poder basado en el prestigio, en la deferencia. Fundamentalmente, la autoridad es un reflejo de la eminencia y su significado más suscito es posiblemente 'influencia moral'" (3)

Tanto la persona del político como la estructura partidaria que lo contenía gozaron hasta mediados de los '70 de un reconocimiento que les permitía articular políticas concretas por vía del consenso. En ese sentido, autoridad y legitimidad son, en realidad, las dos caras de una misma moneda. Es decir que, al quedar calificados tanto partidos como políticos como 'no confiables', lo que está en juego, en realidad, es la capacidad misma del Estado para dar un ordenamiento de la sociedad a partir del consenso y no de la coacción.

Es el sentido mismo de la representación el que se ha quebrado, facilitando con ello la desvalorización de la mediación específicamente política entre Estado y sociedad. Políticos y partidos en general aparecen como inoperantes en el marco de una sociedad atravesada por una profunda crisis. Favorecida muchas veces por prácticas perversas de los mismos partidos, y magnificada incluso por la misma fracción gobernante, esta quiebra de las lealtades partidarias tiende, a su vez, a cuestionar el espacio mismo de la política. En este sentido, la crisis partidaria contribuye a la inserción de un discurso antipolítico, que exige, como requisito primordial, la despolitización de la sociedad.

Si las lealtades partidarias, tal como las hemos conocido, se han quebrado, es porque los partidos políticos -y, por consiguiente, el modelo de político- que se construye en su seno- no responden hoy a los requerimientos de la sociedad. Pero esto no significa que, necesariamente, una crisis de este tipo deba ser resuelta desde una posición negatoria de la política, como plantea el modelo neoconservador. Se trata así, de dos cuestiones que se superponen y que la fracción gobernante tiende a mostrar como no-separables.

En realidad, los partidos políticos argentinos han venido sufriendo una crisis de representatividad desde mediados de 1975. Pero incluso entonces la crisis no recibió un tratamiento político. El golpe militar de 1976 constituyó una respuesta autoritaria que pretendió recrear una nueva sociedad política dibujada por las Fuerzas Armadas, en la que éstas fueran el árbitro último de la politicidad. La instancia de cierre de las libertades y la crudeza misma de la represión velaron el significado de la crisis partidaria.

La recuperación de la democracia, en 1983, pareció devolver, incluso, un cierto protagonismo a los partidos que dejaba en el pasado la quiebra de las lealtades partidarias. Sin embargo, incluso en un momento de particular revalorización de la política, podemos percibir síntomas que ponen de manifiesto un cambio en la forma en que la sociedad tendía a elegir a sus candidatos. Mientras la sociedad del '73 se caracterizó por una

identificación masiva en los partidos -particularmente el peronismo, y en segundo lugar el radicalismo-, la sociedad del '83 no generó en los ciudadanos este sentimiento fuerte de pertenencia a un partido político. Incluso comenzó a delinearse una franja importante del electorado, a la que se denominó 'indecisos' y que, en definitiva, podían llegar a revertir los pronósticos electorales.

Si bien es cierto que la presencia de los 'indecisos' puede ser índice de una sociedad política más dinamizada, que garantiza a los distintos grupos en pugna la posibilidad real de alternancia en el poder, el hecho mismo que esta franja se incrementara denunciaba, también, la incapacidad de las estructuras partidarias de hacer creíbles sus *propias propuestas*. Esto llevó a que el voto, en muchos casos, se definiera no por una elección positiva, sino por una negativa. Es decir, que se votaba no tanto para que se llevaran adelante ciertas políticas, sino para evitar que ciertos grupos llegaran al poder.

Esta definición negativa del voto, al tender a generalizarse, cuestiona la misma noción de representación. Si lo que se elige es el mal menor, difícilmente ese ciudadano se sienta 'representado' por quien eligió, volviendo a replantearse, entonces, el problema de la legitimidad. Esto plantea una constante frustración en el electorado que se traduce en el descreimiento actual. Hoy es cada vez menor la fracción de la sociedad que se siente representada en alguna propuesta partidaria.

Más que el partido como lugar de construcción de la identidad política, es la persona de algún candidato la que consigue un nivel de consenso tal que permite que su partido acceda al poder. Por eso sostiene Manuel Mora y Araujo que se ha comenzado a esbozar *"una cultura electoral que selecciona a las personas; no a los partidos; que atiende a las señales generadoras de confianza, no a los programas"*.(4)

Esta modificación en la construcción de las lealtades políticas tuvo su primera manifestación ya en 1983. Si Alfonsín ganó las elecciones en aquel momento fue -entre otros factores que también incidieron pero que no abordaremos por las características del presente trabajo- porque consiguió trascender su propio partido. En este sentido, la figura de Alfonsín no constituyó para el imaginario social una pertenencia exclusiva de la Unión Cívica Radical.

Se generó, así, un fenómeno novedoso en la cultura política argentina. Mientras gran parte de los votantes de la fórmula radical no se sentían identificados con ese partido -hecho que se manifestaba explícitamente-, entablaban una lealtad particular con la figura de Alfonsín y con el programa político que representaba. Teniendo en cuenta esto último, vemos que, en este caso, el tránsito de la lealtad política desde la estructura partidaria a la figura del candidato, no excluía, en realidad, la elección de un programa político.

Aunque esto no se planteó como manifestación de una crisis partidaria, lo cierto es que ya entonces la estructura partidaria era visualizada como una instancia de construcción de un interés particular colectivo, tendiente a la satisfacción de los fines *egoístas de sus miembros*. En función de esto se estaba produciendo un cambio en el

objeto de las lealtades políticas. Mientras que en el '73 las estructuras partidarias contenían a sus propios candidatos, es decir, eran la garantía última, frente a la sociedad, de que un programa se llevara adelante, a partir del '83 comienza a esbozarse un proceso inverso.

Al constituirse en objeto de la lealtad política el candidato más que la estructura partidaria, es aquél el que legitima la inserción del partido como instancia necesaria de representación. Aunque en un momento de normalidad política puede resultar poco relevante determinar quién se constituye en objeto fundamental de la lealtad política, ya que la persona del candidato y la estructura partidaria se imbrican de tal manera que generalmente refuerzan la idea de programa, la situación adquiere una importancia distinta en un momento de crisis. Al constituir a los atributos personales del candidato en objeto primordial de la lealtad, se introduce sutilmente una nueva instancia de inestabilidad.

La legitimidad del sistema tiende, así, a fundarse en lo que Weber llama el carisma, dando con ello espacio a la aparición de elementos irracionales como instancia de articulación del consenso. Si esto se produce en un momento de revalorización de la política, ésta cumple, al menos en principio, una función de contención de lo irracional, ya que la política es, fundamentalmente, argumentativa. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto se produce en una sociedad atravesada por una profunda crisis estructural que tiende a incrementar los niveles de marginalidad, vemos que ese tipo de consenso se asienta sobre bases particularmente débiles.

El hecho de que el candidato pueda trascender su propia particularidad política más por sus cualidades personales que por representar fines racionalmente elegidos como válidos, deja abierta la posibilidad para el surgimiento de cualquier tipo de mesianismo. Incluso, la pérdida abrupta de consenso a la que se ve expuesta, con la consiguiente frustración para la sociedad, tiende a favorecer el desarrollo de formas autoritarias, que hacen peligrar la consolidación de un proceso democrático.

La enfermedad del "internismo"

Al haberse producido este cambio en el objeto de las lealtades, y una frustración de las expectativas de la sociedad, los partidos políticos aparecen ante aquélla como una maquinaria incapaz, incluso, para seleccionar candidatos con las cualidades personales necesarias para revertir la situación de crisis. De esta manera se introduce una instancia negatoria de la política que facilita la inserción de candidatos que explícitamente niegan su interés por aquélla. Esto hace que el partido tienda a cerrarse más en sí mismo, como mecanismo defensivo, agravando aun más la situación.

En ese sentido, debemos tener presente que, si la sociedad desconfía cada vez más de sus políticos, es porque percibe que discurso político y realidad se escinden en la conciencia del ciudadano común. Lo que se dice aparece, así, en un registro distinto de lo que pasa, concretamente de lo que le pasa a cada hombre particular de esta sociedad.

Ambos registros se superponen sin encontrar puntos de contacto entre sí que permitan revertir la situación.

En parte esto es producto de la incapacidad por parte de numerosos dirigentes, particularmente intermedios, por incorporar en su forma de aprehender la realidad las transformaciones sufridas hasta ahora por la sociedad. Incluso, en muchos casos, se percibe una resistencia a reconocer la existencia de tales cambios. Frente a una sociedad que ha trastocado su funcionamiento, la clase política tiende mayoritariamente a mantener sus viejos esquemas.

Al haber perdido el discurso las bases materiales de sustentación, la inserción individual en los espacios de poder dentro de la estructura partidaria tiende, así, a cobrar una importancia mayor, aunque ya desprovista de un sentido que trascienda lo meramente personal. Como sostiene Del Percio,

"Al perder su sentido, la clase política vuelve sobre sí, y, consecuentemente, transforma a la actividad política en un fin en sí misma".(5)

Convertida la organización partidaria en medio y fin en sí misma, la escisión entre ella y la sociedad se profundiza, al no encontrar esta última un interés común que la identifique con la organización partidaria. Cómo resuelven los partidos las relaciones internas de poder no constituye para la sociedad más que una 'enfermedad' que incluso perjudica toda posible resolución general de la crisis. Las corrientes internas se muestran, así, impudicamente preocupadas por una puja intra-partidaria para garantizar sus propios espacios relativos de poder, tanto en la estructura partidaria como en el seno del Estado, antes que privilegiando la construcción de un espacio común.

Es en esa instancia donde, fundamentalmente, los partidos niegan su rol de mediación específicamente política entre Estado y sociedad, cuestionando, por ello mismo, la instancia de representación política. Es aquí donde el discurso destinado a la sociedad se divorcia de la práctica política concreta. Ante la proximidad de una interna, el partido se repliega sobre sí mismo marginando a la sociedad en general como a gran parte de sus propios afiliados, convirtiendo la interna en un fin en sí mismo para el mejor posicionamiento de las fracciones más sólidamente organizadas.

Las internas, tal como hoy la manejan los partidos, desnudan el deseo de poder por el poder mismo, privilegiando, así, la posición relativa de la fracción por sobre el cómo y el para qué se gana. La sociedad es testigo de reacomodamientos muchas veces coyunturales pero que no permiten comprender cuáles fueron los motivos reales que separaron o unieron a los grupos en algún momento. Si las diferencias programáticas y de principios no alcanzan a dar cuenta de estos reacomodamientos, la explicación pasa, necesariamente, por la satisfacción de apetencias personales de prestigio y de poder, volviendo no creíble la propuesta global para la sociedad.

Este divorcio entre práctica concreta y discurso plantea, en realidad, un choque entre dos concepciones de la política que no alcanzan a dirimirse adecuadamente. Mientras una parte de la dirigencia política tiende a privilegiar, al menos en lo discursivo,

el aspecto argumentativo de la política -es decir, la política como instancia de resolución racional del conflicto-, en la práctica concreta, esa misma dirigencia termina reduciendo la política a la simple resolución de las relaciones de fuerza.

Aceptar la primera definición implicaría reconocer a la política como instancia de elección de valores a partir de los cuales organizar la vida en sociedad. Pero, aceptar la segunda conduce, necesariamente, a la conformación de estructuras organizativas cada vez más burocratizadas, única forma posible de ser eficaz en este contexto. El aparato cobra, así, una importancia mayor para un político, como instancia necesaria para el logro de sus fines, dejando de lado la articulación del debate en la sociedad. Como sostiene Carlos Floria,

"indirectamente, por su porfía, su tosudez, su ambición de poder por el poder mismo, pone en peligro al sistema".(6)

Este tipo de comportamiento en parte es una secuela de la forma en que se conformaron los partidos políticos argentinos durante las últimas décadas. El período de alternancia entre golpes militares y regimenes constitucionales, con una marcada preponderancia de los primeros, determinó una prolongada etapa en la que la práctica específicamente política quedó virtualmente anulada. La clausura de este espacio facilitó el anquilosamiento de una clase política cuyo comportamiento, en última instancia, no era juzgado por la sociedad, sino por una minoría que se arrogaba el poder.

Cada período de dictadura significó, desde este punto de vista, un respiro en el desgaste que habían sufrido las estructuras partidarias, así como la posibilidad posterior de rearmar su discurso, al emerger en la sociedad la resistencia al gobierno de facto. Habitados a replegarse en sí mismos para subsistir durante los largos interregnos militares, los políticos se acostumbraron a apelar a la sociedad e, incluso, a su misma masa de afiliados, en los momentos previos a una elección.

Pero, mantener este tipo de comportamiento hoy, lleva a profundizar peligrosamente la escisión entre representantes y representados, deslegitimando incluso con ello a un órgano del Estado. Al quebrarse el sentido de la representación, el Congreso -órgano representativo por excelencia en el marco de la división de poderes- queda automáticamente cuestionado. Este deterioro de la imagen del político y, consecuentemente, del Congreso, favorece la implementación de un proyecto neoconservador. Perversamente, son los mismos políticos los que facilitan la desvalorización de la política como instancia particularmente argumentativa.

Las falencias del discurso partidario

Frente a la implementación de un modelo neoconservador, los partidos políticos se encuentran atrapados entre sus vicios y una realidad que viene sufriendo transformaciones sustanciales sin poder dar cuenta de ellas plenamente. Esto último se refleja claramente en el discurso político que, en términos generales, no incorpora las modificaciones sufridas en el mundo por el capitalismo y las consecuencias que esto implica en

todo ordenamiento político. Es cierto que una parte minoritaria de la dirigencia política alcanza a percibir este desfase cada vez más grande entre discurso y realidad. De la Rúa, por ejemplo, describe, en ese sentido, adecuadamente la situación:

"El mensaje de la dirigencia es viejo, su discurso es anticuado, se manejan esquemas de situaciones pasadas, como si no hubieran comprendido los cambios operados en el mundo y en el país".(7)

Pero que el diagnóstico sea correcto no impide que esos mismos políticos luego caigan en los mismos vicios que critican. Lejos de plantearse la situación por la que atraviesa Argentina como una crisis estructural, la pobreza conceptual que impide dar cuenta de situaciones nuevas hace que la explicación se centre en el aspecto moral. En ese contexto, la pauperización de la sociedad no es producto de la quiebra de un modelo de desarrollo -lo que implicaría la necesidad imperiosa de definir una nueva inserción de la Argentina en el mercado mundial-, sino del enquistamiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado.

La forma en que el tema de la corrupción monopoliza hoy la explicación de la crisis por la que atraviesa la sociedad no solamente esconde el problema real, sino que, además, genera expectativas falsas en la sociedad. Plantear, como hace el mismo De la Rúa que *"gran parte de la pobreza actual es resultado de esa corrupción"*,(8) implica sugerir que mediante la eliminación de la segunda mágicamente se puede revertir la situación de marginalidad.

En este contexto, no interesa cuáles sean los argumentos, por ejemplo, para explicar la necesidad de la reforma del Estado. En el imaginario social si el Estado está en quiebra es por la existencia azarosa de corruptos y no porque estructuralmente el Estado se haya constituido en traba del desarrollo de la sociedad. De esta forma se reedita el mito de la 'Argentina potencia', impidiendo, así, un debate político en torno a un nuevo modelo de organización societal.

Mezcla de una necesidad por lograr un discurso efectista que asegure un cierto caudal electoral y de una dificultad por generar conceptos nuevos que den cuenta de una realidad en abrupta transformación, los políticos terminan apelando al uso de *slogans* ya remanidos que suenan cada vez más huecos. El discurso partidario, tal como se presenta hoy a la sociedad, parece irremediamente condenado a dos alternativas cuya enunciación sufre, a su vez, un peligroso reduccionismo economicista.

En ese sentido, la cuestión se plantea como: a) una modernización construida a partir del mito de la bondad reguladora del mercado que, en su variante más extrema, está representada por la alianza gobernante; o por el contrario, b) se desconoce a aquélla, revirtiendo nuevamente a alguna variante más o menos sofisticada del keynesianismo. Sin embargo, ambas alternativas no se presentan de manera clara a la sociedad. Tanto una como la otra conviven en el seno de los partidos mayoritarios. Y lo que resulta todavía más confuso, tampoco las fracciones internas se diferencian entre sí por adherir a una u otra posición. Por el contrario, en su interior conviven contradictoriamente ambos

discursos.

Esto da la pauta de la carencia de un debate teórico tanto dentro del partido mismo como en el marco de la sociedad que apunte a dirimir el tipo de inserción de la Argentina en el mercado mundial, así como el rol que les cabe, tanto al Estado como a la sociedad civil, en el marco de una sociedad que debe asegurar su desarrollo. Hoy se ha distorsionado a tal punto el debate, que tiende a abordarse más los efectos que las causas. Sin un andamiaje teórico-conceptual preciso que demuestre un conocimiento adecuado de la sociedad, la dirigencia partidaria no consigue articular con cierta permanencia los consensos, abriendo en el sistema político una fisura peligrosa.

El mito del mercado

Si las propuestas imbuidas de cierto keynesianismo no hacen más que remitir a un modelo de desarrollo que, en realidad, es el que hoy está en quiebra, la alternativa modernizadora no llega tampoco a clarificar adecuadamente el significado de la crisis. Particularmente el modelo neoconservador tal como se propone desde el gobierno peronista, introduce elementos que velan la posibilidad de comprensión. Al reducirse la modernización al mero concepto de privatización, se gesta en el imaginario social la idea de que la apropiación privada de todos los bienes sería algo así como la panacea para todos los males. En este contexto, el mercado -o, mejor dicho, la imagen que de él se promueve en la sociedad- se convierte en el lugar donde personas y cosas pueden adquirir su justa valoración. De esta forma se incentiva la fantasía individualista de ver reconocido los propios méritos por encima de cualquier circunstancia, sin tener en cuenta las características reales de todo mercado que opera libremente sin que se establezcan ciertos límites externos en base a la equidad.

Paralelamente a este nuevo mito del mercado que hoy parece imponerse, la imagen del Estado tiende a deteriorarse, no solamente en lo atinente a su rol como sujeto económico -el Estado como mal administrador de las empresas-, sino, particularmente, como una instancia que le permita desempeñar el rol de garante último de la equidad social. Esto último, por supuesto, aparece de manera totalmente velada. La crítica a los políticos como un sector corrompido en sí mismo (9) se hace extensiva, consecuentemente, a la política y al Estado como fuentes 'cuasi-naturales' de corrupción. Esto sí aparece explícitamente en el discurso oficial. El vicepresidente Eduardo Duhalde, por ejemplo, defendía la política de privatizaciones, durante una entrevista, en estos términos:

"Lo que hay que lograr es lo que estamos buscando: por un lado, cerrar los grifos del Estado, que es corrupto. (...) La reforma del Estado y las privatizaciones eliminarán un factor de corrupción espectacular".(10)

Dicho en otros términos, la imagen que se traslada a la sociedad es la de que 'los vicios son públicos, mientras que las virtudes las logra exclusivamente el mercado'. Si bien es cierto que la construcción del espacio público no debe ser privativa únicamente del

Estado, lo cierto es que la noción de mercado -que, en principio, tendería a reforzar a la **sociedad** civil frente a aquél- es en sí misma negatoria de todo espacio público. Como sostiene James F. Petras,

“el libre mercado desgasta los vínculos sociales con la sociedad y socava la pertinencia de las instituciones del Estado para asuntos colectivos”.(11)

Este efecto disolvente se exagera hasta el paroxismo en el marco de un proyecto neoconservador como el que hoy se intenta aplicar en la Argentina, ya que se niega en los hechos al Estado toda función de regulación de las distorsiones que puede producir el mercado. Esto se traslada al plano de la política reproduciendo efectos similares. Son estos efectos los que claramente destaca Carlos Álvarez (“Grupo de los 8”, corriente peronista disidente), cuando, al referirse al actual modelo menemista plantea que

“se reconoce también en su capacidad para atomizar las posibilidades de la oposición, fracturando las representatividades y las solidaridades políticas, sociales y humanas básicas”.(12)

En pocas palabras, nos encontramos ante una propuesta que, planteando la necesidad de disminuir el poder del Estado -para lo que apela al concepto de privatización-, niega al Estado el rol de regulador del interés general. Esto no significa auspiciar una teoría negatoria del Estado. Por el contrario, el concepto de Estado mínimo, al que recurre el discurso privatista, promueve, en realidad, el reforzamiento del Estado, particularmente en su faz represiva. Como explicara Raúl Granillo Ocampo, se busca construir un Estado que *“acentúe su presencia en actividades que le competen, como la justicia y la seguridad”*.(13)

Es decir que, mientras se promueve la imagen de un Estado que se achica, se produce una mayor concentración de poder en aquél. En realidad, el Estado, lejos de ocuparse de ciertas funciones básicas en la sociedad, tiende a convertirse en un aparato con una alta capacidad represiva sin que el hombre común pueda poner límites al poder estatal. La libertad aparece como libertad privada, es decir, como libertad en el mercado, y no como libertad pública, es decir, como capacidad para resistir a la opresión.

En el marco de una sociedad de recursos cada vez más escasos, la regulación exclusiva por parte del mercado tiende a acentuar aun más los extremos, tendiendo a incrementar la marginalidad social. Por eso mismo, Kenneth Galbraith sostiene al respecto que:

“El papel del Estado es indudablemente el de asegurar protección y justicia social a todos aquellos que si no serían víctimas del sistema social. Creo fuertemente que en un régimen capitalista se debe tomar medida para promover una mayor igualdad en la distribución de la riqueza. Si no es así, la desigualdad es demasiado estridente y no permite la paz social”.(14)

Por un lado, la implementación de un capitalismo salvaje nos conduce a dar forma a una sociedad que incrementa sus niveles de violencia. Por el otro, el Estado, al concentrar una capacidad represiva mayor en su seno, se convierte en una instancia coactiva necesaria, para contener la violencia. Una sociedad con estas características es una sociedad que niega la política y niega con ello la posibilidad misma de construir un orden democrático. Pero, no solamente porque se exacerbaría el enfrentamiento entre quienes son integrados y quienes son expulsados por el mercado, sino, además, porque dentro del primer grupo se tiende a anular la pluralidad.

La renovación de la clase política

El reduccionismo económico con el que tiende a leerse tanto la crisis como sus posibles soluciones, vela las profundas transformaciones que se operan hoy dentro de la sociedad política. Con una dirigencia partidaria mayoritariamente acusada de inoperante y corrupta, el proyecto neoconservador encuentra un terreno fértil para promover el recambio de la clase política, al mismo tiempo que fomenta una fuerte despolitización de la sociedad.

Hoy presenciamos los albores de un proceso de 'depuración' de la dirigencia partidaria y, en principio, las próximas elecciones del presente año constituirían una instancia clave para 'reformular el mapa político nacional'. Como dijera el secretario de cultura del Partido Justicialista metropolitano, Javier Mouríño, hoy se necesita una renovación de las 'caras' que se muestran en la política.

"Como en todos los sistemas, lo que está fallando son los hombres. Lo que en realidad se busca en la instrumentación técnica de la modificación del sistema, es cambiar los hombres".(15)

Pero, este cambio de 'caras' no solamente pretende promover los recambios habituales de las figuras desgastadas y la incorporación de otras nuevas. También intenta producir una reestructuración ideológica de la clase política, expulsando de su seno ciertas manifestaciones que hoy aparecen duramente atacadas desde el gobierno. Se trataría de un recambio que debe producirse, no consolidando necesariamente la dirigencia de un solo partido, sino dibujando una nueva clase política, a partir de la 'depuración' en manos de la sociedad, de los partidos existentes. Esto lo plantea claramente Mouríño:

"Se daría el fenómeno de que Angeloz sería el presidente del radicalismo. De la Rúa podría ganar el control partidario a Nosiglia en la Capital Federal, aunque en una interna cerrada jamás le puede ganar a la Coordinadora. En el justicialismo pasa lo mismo: el prestigio del presidente Menem, que ganó una interna contra toda la estructura partidaria, necesita su correlato en el partido".(16)

Y quiénes perderían?

“Las estructuras partidarias que adscribieron a un proyecto político que en su momento encarnaron Alfonsín y Cafiero”.(17)

Aunque es cierto que toda reforma no siempre tiene el efecto deseado, nos interesa resaltar aquí el nuevo tipo de sociedad política que se pretende delinear a partir del proyecto neoconservador que se está implementando. En este marco, también, se inscribe la adopción de la Ley de Lemas en ciertas provincias. Con el argumento de no mostrar a la sociedad internas partidarias violentas, se anula el debate político. No hay intercambio de ideas y la sociedad se enfrentará, en el momento de la elección, a una propaganda política que, para ser efectista, se basará en *slogans* ante los que deberá decidir por sí o por no. Pero no por ello se habrán eliminado las pujas internas.

Esto constituye, en realidad, una forma de neutralizar la política, ya que ésta tendería a perder su aspecto argumentativo, favoreciendo la elección en base a las personas y no a los programas. Incluso, la posibilidad misma de insertar alternativas nuevas en el espacio político se ve totalmente cercenada, ya que el discurso tiende a hacerse efectista y no lógico.

Muchos han aceptado esta reforma pensando que con ella se contribuye a desburocratizar las estructuras partidarias. Sin embargo, lo cierto es que es mucho más factible que, en el mejor de los casos, se generen estructuras internas menores, pero tanto o más burocratizadas que las existentes, ya que los sublémas tienen un claro contenido electoral. Por ello mismo, se deben convertir en aparatos que garanticen el éxito en las elecciones, y no en fracciones productoras de debate. El lema, en realidad, está destinado a un electorado pasivo que, al igual que en el plebiscito por la reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires, terminará votando por un simple sí o no, premiando o condenando sin más a los distintos grupos.

Se plantea, así, una sofisticada metodología que busca que sea la misma sociedad la que defenestre a aquellas corrientes ideológicas a las que se denomina genéricamente como ‘progresismo’. Es aquí donde debemos detenernos a analizar el significado de una acción de ese tipo. Más allá de la mayor o menor afinidad política que se pueda tener con las fracciones más duramente atacadas desde el mismo gobierno, lo cierto es que su exclusión a partir de las elecciones sería la manera de convalidar democráticamente la clausura del disenso. Se tiende, de este modo, a promover una clase política que, ideológicamente, sea representativa de alguna variante neoconservadora.

Es cierto que los matices que podemos encontrar dentro de aquella postura no dejan de ser relevantes y deben ser tenidos en cuenta en cualquier tipo de análisis político. Pero también es cierto que afianzar una clase política unificada ideológicamente de esta manera reportaría consecuencias serias para la sociedad. En primer lugar, sería una forma de convalidar el modelo neoconservador como única forma posible de organizar la sociedad, convirtiendo a toda alternativa distinta, ya sea actual o potencial, en mera utopía, es decir, en algo carente de realidad. En segundo lugar, la posibilidad misma de construir un orden democrático se vería seriamente dañada, ya que la nueva sociedad

política no tendería a integrar el disenso, sino, por el contrario, a expulsarlo. Y en tercer lugar, la creciente marginalidad social y, por consiguiente, política, provocaría una peligrosa acumulación de tensiones, al no encontrar canales orgánicos para presentar sus demandas.

Conclusiones

Bien sabemos que la aceleración de los tiempos en la política argentina y la preponderancia que ha adquirido el discurso antipoliticista, conspiran contra la posibilidad que tanto partidos como sociedad en general privilegien una lógica discursiva que permita la construcción de un espacio público. El cuestionamiento que hoy se hace a la dirigencia partidaria -y que en realidad se refiere a un modo de hacer política- adolece, por ello mismo, del grave riesgo de poner a la política misma en el banquillo de los acusados. Este hecho favorece la implementación de un modelo neoconservador que, a partir de la nueva relación entre política y economía que plantea, conduce a la despolitización de la sociedad.

La organización partidaria se encuentra hoy en una encrucijada de la que no puede zafar con facilidad. Con una dirigencia en general desgastada, que no ha conseguido liberarse de sus ataduras ideológicas anteriores y que, por eso mismo, no alcanza a dar cuenta de las transformaciones sufridas por la sociedad, los mismos partidos terminan, en un juego perverso, contribuyendo a negarse como mediación específicamente política entre Estado y sociedad.

La articulación de un modelo de sociedad regida por el mercado, requiere la construcción de una nueva sociedad política que legitime la nueva relación entre Estado y economía. En este sentido, el discurso anti-partido que predomina hoy en la sociedad y que es fomentado, incluso, desde el poder, tiene por objeto producir un cambio en la composición de la clase política que conducirá a replantear la función del partido político en la sociedad.

Al haberse quebrado la forma de articular las lealtades políticas -se privilegian las cualidades personales y no los contenidos programáticos-, los partidos tienden a convertirse en aparatos meramente electorales. Al mismo tiempo, se ha neutralizado la política al anularse el debate en torno a los valores que determinan el tipo de organización social. Esta desideologización favorece la entronización de una nueva clase política de neto corte conservador, aunque en su seno puedan reconocerse matices que no dejan de ser relevantes.

También se puede percibir una tendencia a expulsar de la sociedad política a aquellas corrientes que se las identifica con el genérico apelativo de 'progresismo'. Con este término se designa, desde la fracción gobernante, no a un partido determinado, sino a corrientes internas particularmente del mismo peronismo y del radicalismo. Se plantea, así, la necesidad de producir una 'depuración ideológica' en el seno de la clase política, 'depuración' que, se pretende, realice la misma sociedad.

La consolidación de una clase política de neto corte conservador, algunos de cuyos posibles integrantes tienen un fuerte discurso antipoliticista, afecta cualquier intento actual o potencial de estructurar una propuesta alternativa. En un marco de neutralización de la política, se ha modificado la forma de constituir al adversario. Favorecido por los errores que los mismos políticos cometen, y porque sus discursos suenan muchas veces vacíos de contenido, el gobierno encuentra condiciones ideales para cuestionarle al oponente el derecho a opinar, es decir, a integrar el espacio público. En el mejor de los casos, la voz del disidente es mera *doxa* privada y, por consiguiente, no es tenida en cuenta en el momento de la decisión política.

Es cierto que esta mecánica no anula por sí misma la conflictividad. Sin embargo, sí contribuye a neutralizarla, ya que tiende a evitar que la oposición se nucleee, consolidando, así, otro polo de poder. El poder, de esta forma, tiende a concentrarse cada vez más en un Estado que, tras la máscara de su achicamiento, se atribuye como rol básico y fundamental el manejo de la coacción. Y el hombre común, que cada vez menos se reconoce en las propuestas partidarias, y cada vez más rechaza las prácticas políticas existentes, queda abandonado a su mundo privado, sin posibilidad de que su voz se conozca al producirse la decisión política.

NOTAS

(*) El presente trabajo fue presentado en las Jornadas Nacionales del Post-XV Congreso Mundial de Ciencia Política, Buenos Aires, 26 y 27 de julio de 1991.

(1) SARTORI, G., *Teoría de la democracia*, t. I., *El debate contemporáneo*, Alianza, Madrid, 1987. pág. 232.

(2) Discurso del presidente Carlos S. MENEM, en el Congreso de Actualización Doctrinaria del Partido Justicialista, en *Página 12*, 15/3/1991, pág. 6. El subrayado es nuestro.

(3) SARTORI, G., *Teoría de la ...*, t. I, op. cit., pág. 233.

(4) MORA y ARAUJO, M., "Se castiga la indiferencia. El retroceso electoral del justicialismo no es nuevo", en *El Cronista Comercial*, 3/3/1991, pág. 11.

(5) DEL PERCIO, E., "La dirigencia descartable", en *Página 12*, 30/4/1991, pág. 8.

(6) Entrevista a Carlos FLORIA, en *El Cronista Comercial*, 2ª Sección, 21/10/1990, pág. 8.

(7) Entrevista a Fernando DE LA RUA, en *El Cronista Comercial*, 18/3/1991, pág. 4.

(8) *Idem*.

(9) Según una encuesta de César Mansilla & Asoc., realizada a principios de este año, un 43% de los encuestados atribuyó la falta de credibilidad en la dirigencia política a la corrupción generalizada, en *El Cronista Comercial*, 10/2/1991, pág. 2.

(10) Entrevista al vicepresidente Eduardo DUHALDE, en *El Cronista Comercial*, 25/11/1990, pág. 15.

(11) PETRAS, J., "El neoliberalismo y la marginalidad. Ausencia de futuro", en *Página 12*, 16/3/1991, pág. 15.

(12) ALVAREZ, "Chacho", "Después de la Plaza", en *Página 12*, 20/11/1990, pág. 6.

(13) Entrevista a Raúl GRANILLO OCAMPO, en *El Cronista Comercial*, 8/7/1990, pág. 5.

(14) Entrevista a Kenneth GALBRAITH en Madrid, en *Página 12*, 22/8/1990, pág. 14.

(15) *El Cronista Comercial*, 2ª Sección, 21/10/1990, pág. 8. El subrayado es nuestro. Mouríño promueve un proyecto de internas abiertas, por el cual los no afiliados votarían en la elección de los candidatos, sin obligación de mantener la misma intención de voto en las elecciones generales.

(16) *Idem*.

(17) *Idem*.

BIBLIOGRAFIA

- ABALO, C., "La economía y el nuevo gobierno. Hacia un inédito conservadorismo popular?", en *Suplemento del Diario Sur*, Buenos Aires, 9/7/1989.
- ALTAMIRANO, C., "Nueva? derecha. Del Proceso a la Nueva Mayoría", en *La Ciudad Futura*, Nº 2, Buenos Aires, Octubre de 1986.
- BOBBIO, N., PONTARA, G. y VECA, S., *Crisis de la democracia*, Ariel, Barcelona, 1985.
- BOSOER, F., "América Latina y la crisis: La democracia perpleja", en *La Ciudad Futura*, Nº 20, Buenos Aires, Diciembre de 1989/Enero de 1990.
- DE IPOLA, E. y PORTANTIERO, J. C., "Crisis social y pacto democrático", en *Punto de Vista*, Nº 21, Buenos Aires, Agosto de 1984.
- DOTTI, J., "¿Viejo? liberalismo, nuevo ¿liberalismo?", en *La Ciudad Futura*, Nº 1, Buenos Aires, Agosto de 1986.
- DUVERGER, M., *Los partidos políticos*, F.C.E., México, 1979.
- GIDDENS, A., "Estados nacionales y violencia" en *Debats*, Nº 14, Institució Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d' Estudis i Investigació, Paterna (Valencia), Diciembre de 1985.
- LECHNER, N., "El proyecto neoconservador y la democracia" en *Crítica y Utopía*, Nº 6, Buenos Aires, Marzo de 1982.
- LEFORT, C., *Essais sur le politique (XIX^e-XX^e siècles)*, Seuil, París, 1986.
- MICHELS, R., *Los partidos políticos*, 2 vol., Amorrortu, Bs. As., 1973.
- MORENO, O., "La crisis y la política en la Argentina", en LAURELLI, E. y ROFMAN, A., (comps.), *Descentralización del Estado. Requerimientos y políticas en la crisis*, Ed. CEUR-Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1989.
- NOVARO, M., "La crisis y los nuevos partidos. Emergencia de una nueva identidad política en el Chaco" en *La Ciudad Futura*, Nº 20, op. cit.
- PETRAS, J., "El neoliberalismo y la marginalidad. Ausencia de futuro" en *Página 12*, Buenos Aires, 16/3/1991.
- PORTANTIERO, J. C. "Las elecciones y el desencanto. Crisis de la política?", en *La Ciudad Futura*, Nº 20, op. cit.
- POULANTZAS, N., "Crisis de los partidos políticos", en AA.VV., *Crisis de los partidos políticos?*, edición a cargo de Fernando Claudín, Dédalo, Madrid, 1980.
- RESZLER, A., *Mythes politiques modernes*, Presse Universitaire de France, París, 1981.
- SARTORI, G., *Teoría de la democracia*, 2 vol., Alianza, Madrid, 1987.
- TULA, J., "Individualismo económico + autoritarismo político. El neoliberalismo es más que una receta económica", en *La Ciudad Futura*, Nº 20, op. cit.
- VERON, E., *El discurso político*, Nueva Imagen-UNAM, México, 1980.
- YANNUZZI, M. A., *Las transformaciones en el sistema político argentino desde la asunción del peronismo*, trabajo de discusión presentado al CIESAL, Rosario, Mayo de 1990. Mimeo.